

Editorial

Los límites del sistema electoral

Mucho se ha discutido acerca de cuán democrático es el proceso salvadoreño. Para Estados Unidos, la Fuerza Armada y el gobierno de turno, el proceso democrático está avanzando lentamente; cuando sus portavoces tienen que reconocer algunas fallas, siempre añaden inmediatamente que falta madurar un poco más para alcanzar los niveles aceptables de las democracias occidentales. Las otras fuerzas sociales han cuestionado que se pueda hablar con propiedad de democracia, dadas las injustas estructuras económico sociales actuales, la militarización y el largo y cruento conflicto armado, la impunidad de la Fuerza Armada, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos, la sistemática represión del movimiento popular y sindical, y la ineficacia del sistema judicial. Todos estos elementos ponen en entredicho la existencia de una democracia, tal como la entiende occidente. Se trata de aspectos fundamentales de cualquier democracia, que, en nuestro país, no tienen la actualidad necesaria para poder hablar de un proceso democrático fuerte y sano.

Lo único que parecía escapar eran las elecciones. En efecto, hablamos tenido seis elecciones en las cuales, progresivamente, avanzamos, dotando al país del medio más característico de la democracia: la expresión de la voluntad popular a través del voto para elegir periódicamente a las autoridades nacionales y locales. Presuntamente, se estaba proporcionando al país un mecanismo confiable para llevar a cabo el acto más característico de la democracia: las elecciones. Los promotores de ese esquema electoral, Estados Unidos y los gobiernos de la democracia cristiana primero y ahora de ARENA, han presentado las elecciones como la panacea de la democracia. Las organizaciones de la izquierda, y en especial, el FMLN se han opuesto a este esquema electoral y lo han intentado sabotear inútilmente en las elecciones de la década pasada.

Los resultados de las elecciones apoyaban a quienes identificaban democracia y elecciones. A lo largo de esa serie sucesiva de elecciones se había logrado un registro electoral bastante confiable y cada vez más grande; se había reformado la ley electoral y se habían perfeccionado los mecanismos para emitir el voto y para el escrutinio. Se había venido hablando cada vez menos de fraude electoral. Casi parecía que los fantasmas del fraude de la década de los setenta, que mantuvieron en el poder a los militares y al Partido de Conciliación Nacional, con la ayuda activa y directa de la Fuerza Armada, habían desaparecido. Por lo menos, en las últimas elecciones de la década de los ochenta, todo esto parecía estar exorcizado definitivamente. Para las elecciones del 10 de marzo, los responsables del sistema electoral incluso se tomaron la libertad de invitar a la OEA para supervisar la honestidad y la limpieza de las elecciones salvadoreñas.

Estados Unidos vendía bien la imagen de la democracia salvadoreña, puesto que había elecciones libres y limpias. Este éxito de imagen y de relaciones públicas le permitió seguir la guerra contra el FMLN, pues se trataba de una democracia que se defendía legítimamente de la agresión subversiva y antidemocrática. Esta campaña produjo muchos cientos de millones de dólares, que financiaron el desarrollo del proyecto contrainsurgente de la década pasada. Los observadores de un día regresaban a sus países de origen conmovidos por el fervor democrático del pueblo salvadoreño, que votaba religiosamente. Eran buenos embajadores que atestigüaban el éxito del plan estadounidense.

Sin embargo, las elecciones para elegir los 84 diputados de la asamblea legislativa y los veinte del parlamento centroamericano, y sus respectivos suplentes, y los 266 alcaldes y concejos municipales, llevadas a cabo el 10 de marzo, han echado por tierra la mayor parte de estas presunciones. Lo único que parecía que podíamos hacer bastante bien, democráticamente hablando, las elecciones, han dejado mucho que desear. Tanto que el sistema electoral, al mostrar sus límites, ha quedado cuestionado. De esta forma, el sistema electoral se encuentra compartiendo la misma crisis que los demás organismos del Estado salvadoreño. La sensación que ha quedado en el país después de estas elecciones es que, en materia electoral, estamos como al comienzo. Lo que parecía logrado, después de una década de esfuerzos y de cientos de millones de dólares, se ha desmoronado.

Conviene, pues, preguntarse qué ha pasado con el sistema electoral, por qué está en crisis. Con esto no estamos cuestionando, de ninguna manera, la legitimidad de las elecciones ni de sus resultados. Las elecciones tienen su propia legitimidad dentro del marco sistémico actual. Lo que no ha sido legítimo ni ha sido técnicamente bien manejado ha sido el sistema electoral mismo, el cual, por otro lado, se encuentra en

Lo que no ha sido legítimo ni ha sido técnicamente bien manejado ha sido el sistema electoral.

la agenda de la mesa de negociación, donde está en juego el poder real.

1. El fracaso del sistema electoral: los fallos de las elecciones del 10 de marzo

Los errores y las deficiencias que han mostrado los límites del sistema electoral no son ni pequeños ni pocos y sí tienen importancia. Los voceros del gobierno de Washington y algunos partidos políticos han querido hacer creer lo contrario. Si cada error o fallo se considera aisladamente puede dar la impresión que se trata de imperfecciones sin importancia; pero si se ponen todos juntos, el panorama cambia notablemente.

(a) La primera serie de fallos se debe a la deficiente organización de todo el proceso electoral, cuyo responsable último es el Consejo Central de Elecciones: ha habido demora en la entrega de los finiquitos y de las constancias a los candidatos de los partidos políticos por parte de la Corte de Cuentas, siendo necesario ampliar el plazo ante las quejas de aquéllos; algunos centros de votación abrieron con varias horas de retraso, reduciendo mucho el tiempo para emitir el voto; no hubo disposición lógica de las mesas receptoras de votos ni indicaciones visibles para dirigir a los votantes; varios lugares de votación fueron cambiados a última hora; como casi no hubo transporte público, algunos partidos políticos ofrecieron este servicio en vehículos que portaban propaganda partidaria; en bastantes centros de votación, los partidos políticos, sobre todo ARENA, desplegaron su propia propaganda; la disposición de las urnas y la presencia de los vigilantes de los partidos, sobre todo de ARENA, no garantizaron suficientemente el secreto del voto; la mayoría de los vigilantes eran de ARENA, quienes se condujeron con prepotencia y profiriendo amenazas contra los representantes de los partidos de la oposición y, eventualmente, contra los votantes. Estas actitudes culminaron en un lastimoso incidente, protagonizado por los miembros de los partidos Demócrata Cristiano y de ARENA, en Santa Tecla, el domingo 17, cuando se llevó a cabo la votación para alcalde de dicha ciudad, pues en las papeletas del 10 de marzo no apareció la bandera de Convergencia Democrática. En los sitios de votación, los miembros de todos los partidos sugirieron a los electores votar por su respectivo partido. Los integrantes de las mesas receptoras de votos no tenían conocimiento claro de los procedimientos ni de sus funciones. En algunos lugares, los miembros de estas juntas fueron impuestos o la mayoría de ellos pertenecía a un sólo partido. En algunas mesas, los votantes recibieron más de una papeleta para elegir

diputados o alcaldes. La Fuerza Armada estuvo presente en varios sitios de votación en clara contravención a lo establecido por la ley electoral.

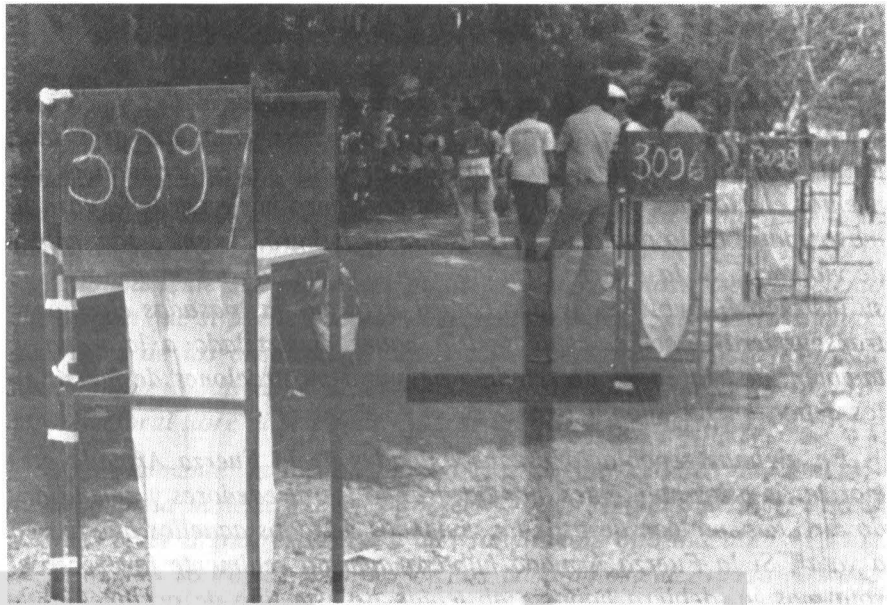
El escrutinio final, cuyo resultado se conoció dos semanas después, aumentando con ello la sombra del fraude y de la componenda entre los partidos políticos de la derecha, fue lento y confuso. El desorden comenzó en las mismas juntas receptoras de votos. Por primera vez, desde la década de los setenta, aparecieron papeletas de votación a favor de Convergencia Democrática y del partido Demócrata Cristiano, debidamente aprobadas por las autoridades de la junta receptora de votos, en varios basureros del país.

(b) Más grave es la enorme cantidad de ciudadanos debidamente documentados que no pudo votar por los fallos del sistema y de la administración electoral. Esto ha dado pie para que algunos hablaran de "fraude técnico". Según el primer informe de los observadores de la OEA, en algunos departamentos, en los cuales la misión contó con datos más precisos, cerca del 30 por ciento de los ciudadanos empadronados en el último año no pudieron reclamar su carnet electoral. La entrega de este carnet, según el mismo informe, se dificultó por falta de información clara. Ante este hecho, los observadores de la OEA gestionaron para que el gobierno permitiera votar con sólo la solicitud para ser inscrito en el registro electoral. La medida fue aprobada a última hora, pero no hubo información suficiente en las juntas receptoras de votos, lo cual causó confusión, retraso e impidió que, de hecho, muchos ciudadanos que aparecían en las listas y no tenía su carnet electoral no pudieran votar.

Un número significativo de ciudadanos tampoco pudo votar al no aparecer en las listas del registro electoral, no obstante tener carnet y haber votado en elecciones anteriores; esta exclusión afectó desde los habitantes de la Ciudad Segundo Montes hasta algunos amigos del presidente Cristiani, quienes fueron a votar con él y no pudieron hacerlo. En otros casos, no concordaban los números del carnet electoral con los que aparecían en el registro.

Según los datos oficiales, el padrón electoral está conformado por 2,180,000 ciudadanos, pero, según la misma fuente, en la elección de diputados sólo votaron 1,153,013, es decir, más un millón de ciudadanos no emitieron dicho sufragio por negligencia o por incapacidad de las autoridades salvadoreñas o porque simplemente se abstuvieron.

(c) En tercer lugar, no hay que olvidar que estas elecciones tuvieron lugar en medio de la guerra y que una de sus secuelas, la violencia política estuvo presente, impidiendo el desarrollo de un proceso electoral democrático, en sentido estricto.



El FMLN, en un cambio radical de posición, no boicoteó las elecciones, pero tampoco permitió que éstas tuvieran lugar en unos 30 municipios que se encuentran bajo su control. Además, el FMLN decretó una tregua unilateral durante las elecciones; la cual no fue respetada por la Fuerza Armada, que quiso forzar su presencia en las zonas controladas por el FMLN en Chalatenango, Morazán y La Unión, donde hubo combates el 10 de marzo. Como el control territorial del FMLN ha obligado al gobierno a trasladar a las autoridades municipales de los pueblos controlados permanentemente por aquél a las cabeceras de otros municipios, los ciudadanos que querían ejercer el sufragio en las elecciones pasadas tuvieron que desplazarse a dichas cabeceras municipales. Esta situación planteó problemas de índole diversa, los cuales, además, afectaron la capacidad de votar.

Por otro lado, la Fuerza Armada también adoptó una postura novedosa en estas elecciones al establecer una serie de normas para regir la conducta de sus miembros. En sí mismas, esas normas no eran malas, puesto que tenían un gran potencial para devolver la confianza de la población en las elecciones y en la Fuerza Armada como garante de los derechos constitucionales. Sin embargo, está aún por demostrarse su eficacia práctica para normar la conducta del ejército de acuerdo a los principios democráticos. Todo dependerá del curso que se dé a las diversas denuncias por abuso de poder y por ejercer violencia arbitraria de lo cual se acusa a elementos del ejército. Hasta ahora, todo parece indicar que estas denuncias correrán la misma suerte de aquellas otras que las han precedido, el olvido. Si esto fuera así, la Fuerza Armada ha dejado pasar otra gran oportunidad para comenzar a demostrar al pue-

blo salvadoreño cuán decidida está a respetar y a hacer respetar la Constitución.

La simple presencia de la Fuerza Armada en las calles y, en este caso, en algunos sitios de votación, provocó más temor que seguridad en la población. El llamado plan "democracia", característico de los eventos electorales, no es sinónimo de confianza ni de garantía para la mayor parte de la población, sino señal de peligro, de enfrentamiento y de violencia. Si la Fuerza Armada, consecuente con las intenciones de su instructivo, hubiera deseado contribuir a que las pasadas elecciones transcurrieran pacíficamente podría haber acuartelado a la tropa y, también, podría haber prescindido de sus demostraciones de fuerza en los departamentos conflictivos.

En algunas repoblaciones, las unidades de la Fuerza Armada aterrorizaron a los habitantes, bombardeando los alrededores y amenazando directamente con destruir las viviendas de todos aquellos que fuesen a votar. Si la Fuerza Armada hubiera querido realmente favorecer el voto masivo, debiera haberse abstenido de este tipo de acciones anti-democráticas.

El proceso electoral mismo se caracterizó por la violencia verbal y física. La violencia verbal fue practicada por todos los políticos, quienes centraron sus intervenciones públicas en la diatriba y en la descalificación de las cualidades morales de sus adversarios. Parte de esta violenta campaña fue la vinculación pública de la Oficina de Tutela Legal y de varias organizaciones populares y sindicales a la estructura orgánica del FMLN por parte de fuentes ministeriales y de medios de comunicación vinculados a ARENA.

La mayor parte de las denuncias presentadas ante la OEA fueron las de intimidación a los activistas de los partidos políticos, siendo los más afectados Convergencia Democrática, Unión Democrática Nacionalista, partido Demócrata Cristiano y partido de Conciliación Nacional respectivamente. La mayoría de las denuncias señala a la Fuerza Armada y a los paramilitares como responsables; en otros casos, se señala a los activistas de ARENA y al FMLN. Las denuncias contra el FMLN afectan a los partidos Demócrata Cristiano, ARENA y de Conciliación Nacional. También hubo intimidación en una forma muy tradicional, el despido de funcionarios públicos en razón de su militancia o simpatía política.

De la violencia verbal y de la intimidación se pasó, en algunas ocasiones, a la violencia física. El hecho más grave fue el asesinato de un candidato a concejal de la Unión Democrática Nacionalista y de su esposa embarazada, en una populosa calle de San Salvador. Los locales de la Convergencia Democrática, en los municipios de Usulután y San-

ta Ana, fueron atacados con explosivos el primero y allanado por paramilitares el segundo.

La violencia electoral, ejercida ampliamente, ha reforzado el terror ya existente en la población, lo cual debe haber influido determinan-temente para disminuir el número de votantes. La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), corrida en el mes de enero, muestra que el 73.9 por ciento de los encuestados tiene miedo a expresar públicamente sus opiniones políticas, contra sólo el 20 por ciento que afirma que sí puede hacerlo libremente. Es decir, casi las tres cuartas partes de los encuestados dicen estar atemorizados para expresar sus opiniones políticas. Con tanto miedo no se puede hablar de un proceso electoral libre ni se puede esperar una votación masiva.

(d) Finalmente, la misión de observación de la OEA resultó incómoda y hasta molesta para el gobierno, el presidente de la Corte de Cuentas no se dignó responder a una solicitud de información por parte de la misión sobre los trámites de los candidatos, la Fuerza Armada simplemente prometió investigar las denuncias en las cuales aparecían comprometidos algunos de sus miembros y el presidente del Consejo Central de Elecciones reaccionó al primer informe de la misión violenta y ofensivamente. Más aún, hasta antes del comienzo de la campaña electoral, dicho Consejo colaboró activamente con la misión de observación; pero desde que aquélla dio comienzo, la información proporcionada por aquel a la OEA fue siendo cada vez menor.

Esta actitud de las diversas instancias gubernamentales llama poderosamente la atención, porque el mismo gobierno invitó a la OEA a observar las elecciones salvadoreñas; quizás pensaron que ésta sería una observación más, a las cuales ya estamos acostumbrados, la cual legitimaría aún más la modalidad electoral vigente en nuestro país. El primer informe de la misión pone de manifiesto la profunda crisis institucional de El Salvador, una crisis de la cual no se escapan las elecciones. No podía ser de otra manera, puesto que los otros organismos del Estado también están seriamente cuestionados.

Así, pues, después de once años de multimillonarias inversiones, de la mecanización y depuración del registro electoral, con la garantía de la electrónica, de sucesivas reformas a la ley electoral y de muchos cursos y discursos, las elecciones del 10 de marzo han demostrado que el sistema electoral montado impide la votación masiva. ¿Por qué ha fracasado este sistema, construido tan minuciosa y millonariamente? Esta es la pregunta que responderemos en la siguiente parte de nuestro editorial.

Con tanto miedo no se puede hablar de un proceso electoral libre ni se puede esperar una votación masiva.

2. El sistema electoral actual impide la votación masiva

Las elecciones han salido mal, porque el padrón electoral no ha funcionado como debía, excluyendo a un considerable número de ciudadanos; porque el mecanismo para ejercer el sufragio es complicado; porque el escrutinio es rudimentario y, por eso mismo, se presta a la manipulación, arrojando sombras sobre el proceso; por las repetidas violaciones a la ley electoral por parte de todos los partidos, pero mayoritariamente por los miembros de ARENA. En definitiva, tal como lo dijo, en Panamá, un observador del parlamento venezolano, porque todo el sistema está construido para impedir que los ciudadanos voten.

Las anomalías y los defectos señalados arriba no son irrelevantes, sino que más bien son característicos del sistema; tampoco afectan a todos los partidos políticos por igual. Es importante tener claridad sobre estos puntos para no caer en los simplismos de los voceros de los gobiernos salvadoreño y estadounidense, que minimizan los defectos del sistema al afirmar que éstos no tienen importancia y que afectan por igual a todos los partidos políticos. Quienes piensan así pretenden conservar el sistema intacto, puesto que favorece a sus intereses al impedir la votación masiva. En el caso de la elección de diputados, el mayor o menor número de votantes afecta determinantemente el resultado final, dada la modalidad de residuos vigente para elegirlos. Por otro lado, no es extraño que piensen así los representantes del gobierno de un país, cuyo electorado votante rara vez supera el 50 por ciento de los ciudadanos.

Los más afectados por estas graves deficiencias del sistema electoral han sido los sectores populares, puesto que ellos han sido los que más dificultad han encontrado para enfrentarse con la complicada maquinaria electoral. A ellos es a los que más se les ha dificultado la obtención del carnet electoral, pese a la compulsión y a la propaganda gubernamental; ellos son los que menos se encuentran en las listas electorales, pues en su mayor parte son analfabetos; en los municipios más populosos del gran San Salvador fue donde menos horas se pudo votar y donde hubo más confusión por los cambios de los lugares de votación a última hora. Estos sectores fueron los más afectados por la falta de transporte público. El resultado final de la votación muestra un abstencionismo masivo, en el cual puede verse reflejada la eficacia de nuestro sistema electoral para impedir el voto popular.

Una encuesta de opinión pública debe medir cuánto de ese abstencionismo se debe a las anomalías del sistema electoral mismo o al desencanto y desinterés de los ciudadanos en las elecciones, que, en de-

finitiva, mostraría la poca confianza de éstos en los mecanismos democráticos. De hecho, la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), corrida en enero, muestra que la mayor parte de la población (más del 60 por ciento) tiene poca o ninguna confianza en la asamblea legislativa y en los tribunales de justicia; el gobierno goza de un aprecio ligeramente mayor, de acuerdo a la valoración de los encuestados. Si tal cantidad de encuestados tiene tan poco aprecio de la asamblea legislativa no es de extrañar que la votación no haya sido masiva. A estas apreciaciones tan negativas podemos añadir los resultados, también muy negativos, de la última encuesta (ver "Informe especial" en esta edición de la revista) sobre la inutilidad de las elecciones para alterar el rumbo fundamental de los destinos del país y sobre el descrédito de los partidos políticos entre la población.

Esta es una llamada de atención seria para los diputados, pues ellos y los partidos políticos cuyos intereses representan deberían reflexionar sobre el papel de la asamblea en la actual coyuntura del país. Una parte de la energía y de los recursos invertidos en la campaña electoral bien pudieron dedicarse a modificar esta apreciación tan baja sobre la asamblea legislativa. Pero los partidos políticos no estaban interesados en esto, sino en captar votos para sí y en impedir el voto por el adversario al ritmo de musiquillas de moda, sin presentar ninguna plataforma legislativa ni municipal y mucho menos sin explicar a los electores la importancia real de la asamblea legislativa para resolver los problemas más importantes del país. Ni siquiera se explicó a los electores la problemática del parlamento centroamericano; aquéllos votaron por diputados para dicho parlamento sin clara conciencia de lo que hacían.



El abstencionismo masivo ha favorecido al partido gobernante (ARENA), que, además de controlar la asamblea, también tiene en sus manos el gobierno central y la administración de justicia. En estas elecciones de diputados, el número de votos era determinante, porque la suerte de los diputados se ha decidido por una determinada mayoría parlamentaria o por la fuerza de ciertos grupos políticos. El sistema vigente de residuos permite que un centenar de votos o a veces incluso menos decidan la elección de un diputado.

Estas elecciones, por lo tanto, han salido mal, porque la voluntad popular ha sido la que menos ha podido expresarse libremente y porque su expresión ha sido muy limitada, según los resultados oficiales, lo cual es muy poco democrático. Pareciera que se ha tenido miedo al poder del voto masivo y popular, pues éste es el que menos ha llegado hasta las mesas de votación. Se trata de un voto que favorecería a la oposición al actual partido gobernante ARENA, es decir, al partido Demócrata Cristiano y a Convergencia Democrática. De hecho, las encuestas del IUDOP dan que los sectores más inclinados a votar por dichos partidos políticos eran los sectores populares. ARENA ha tenido miedo al voto popular y ha demostrado cuán poco democrática es.

ARENA prefirió arriesgar perder la mayoría cualificada que tenía en la asamblea a cambio de impedir un voto popular que favoreciera a la oposición. Al obstaculizar el voto masivo, ARENA también dejó de recibir votos, pero con ello detuvo momentáneamente el avance de la oposición. Quizás ARENA pensó que tenía fuerza suficiente como para salir airoso del riesgo, es decir, que conservaría la mayoría en la asamblea e impediría, al mismo tiempo, el avance de la oposición política. Su prepotencia lo traicionó. En efecto, contuvo a la oposición, pero perdió la mayoría que tenía en la asamblea. No obstante, ARENA sigue siendo el partido político que tiene más diputados y si logra atraer a los nueve que ha obtenido el partido de Conciliación Nacional, puede tener la mayoría legislativa. Sin embargo, esa mayoría no llega a los dos tercios necesarios para tomar las decisiones legislativas de mayor transcendencia. El costo político pagado por ARENA ha sido elevado y ha comprometido seriamente su propio futuro partidario y el de sus programas político y económico.

Al perder la mayoría cualificada, ARENA ya no podrá legislar prepotentemente como lo ha estado haciendo hasta ahora, y como también lo han hecho todos los partidos que alguna vez han tenido la mayoría calificada de la asamblea —como la misma Democracia Cristiana. A partir de junio, ARENA tendrá que negociar, en primer lugar, con el partido de Conciliación Nacional, lo cual no será difícil, siempre que conceda algo, porque el lugar histórico de lo que queda de este último partido está en ARENA. Pero para obtener la mayoría calificada nece-

sitará contar con los partidos Demócrata Cristiano y, o con Convergencia Democrática.

El partido Demócrata Cristiano ha dicho que su posición en la asamblea dependerá de sus propias consideraciones y de los acuerdos estables que pueda hacer con la Convergencia Democrática y con la Unión Democrática Nacionalista. Sin embargo, en la Democracia Cristiana hasta ahora han privado más sus "propias consideraciones", en las cuales la voluntad de Estados Unidos ha tenido mucho que ver, haciendo que la postura demócrata cristiana sea, en el mejor de los casos, ambigua. Algunos sectores más radicales del partido, que no están de acuerdo con esta política partidista ambigua, quisieran una postura más definida frente a ARENA, pero eso supondría aproximarse a las posturas de la Convergencia Democrática. Para calmar a los descontentos, la dirigencia ha prometido no entregarse dócilmente ni a cambio de nada.

El partido Demócrata Cristiano se encuentra en una situación en la cual debe definir sus planteamientos políticos con sumo cuidado. En ello le va en juego su futuro. Lo que ya no puede seguir haciendo es jugar la carta de la ambigüedad, porque, a mediano plazo, estaría poniendo en grave peligro su futuro partidario. Tomados en perspectiva, los resultados de las elecciones de la última década muestran la tendencia a disminuir el número de votos del partido Demócrata Cristiano. Esto podría indicar que es cada vez menos una alternativa aceptable para las mayorías populares. Para los sectores populares, la alternativa actual estaría cada vez más representada por la Convergencia Democrática. Si estas tendencias se mantienen, la próxima confrontación electoral sería se podría dar entre ARENA y Convergencia Democrática.

Todo parece indicar que al partido Demócrata Cristiano le ha llegado la hora de decidir si se pondrá del lado de las mayorías populares o si seguirá condescendiendo con las políticas elitistas de ARENA. Si opta por lo primero, deberá aproximarse a Convergencia Democrática y a la Unión Democrática Nacionalista. Si opta por lo segundo, desaparecerá como alternativa real para los intereses populares. Si se mantiene donde ha estado hasta ahora, también irá cayendo en la irrelevancia política.

A la luz de los resultados finales de las elecciones, que muestran la fuerza creciente de Convergencia Democrática, los temores de ARENA

Pareciera que se ha tenido miedo al poder del voto masivo y popular, pues éste es el que menos ha llegado hasta las mesas de votación.

aparecen bien fundados. En efecto, de las elecciones del 10 de marzo, Convergencia Democrática ha salido convertida en la tercera fuerza política del país al obtener el 12.16 por ciento de la votación nacional (127,855 votos), con tres puntos porcentuales por encima del partido de Conciliación Nacional, y pese a haber obtenido menos diputados que este último partido, gracias al método de los residuos. Toda la izquierda representa el 14.84 por ciento de la votación nacional. Aunque esta representación de la izquierda es notable, en cuanto muestra su fuerza política, aún es pequeña para poder decidir los destinos nacionales.

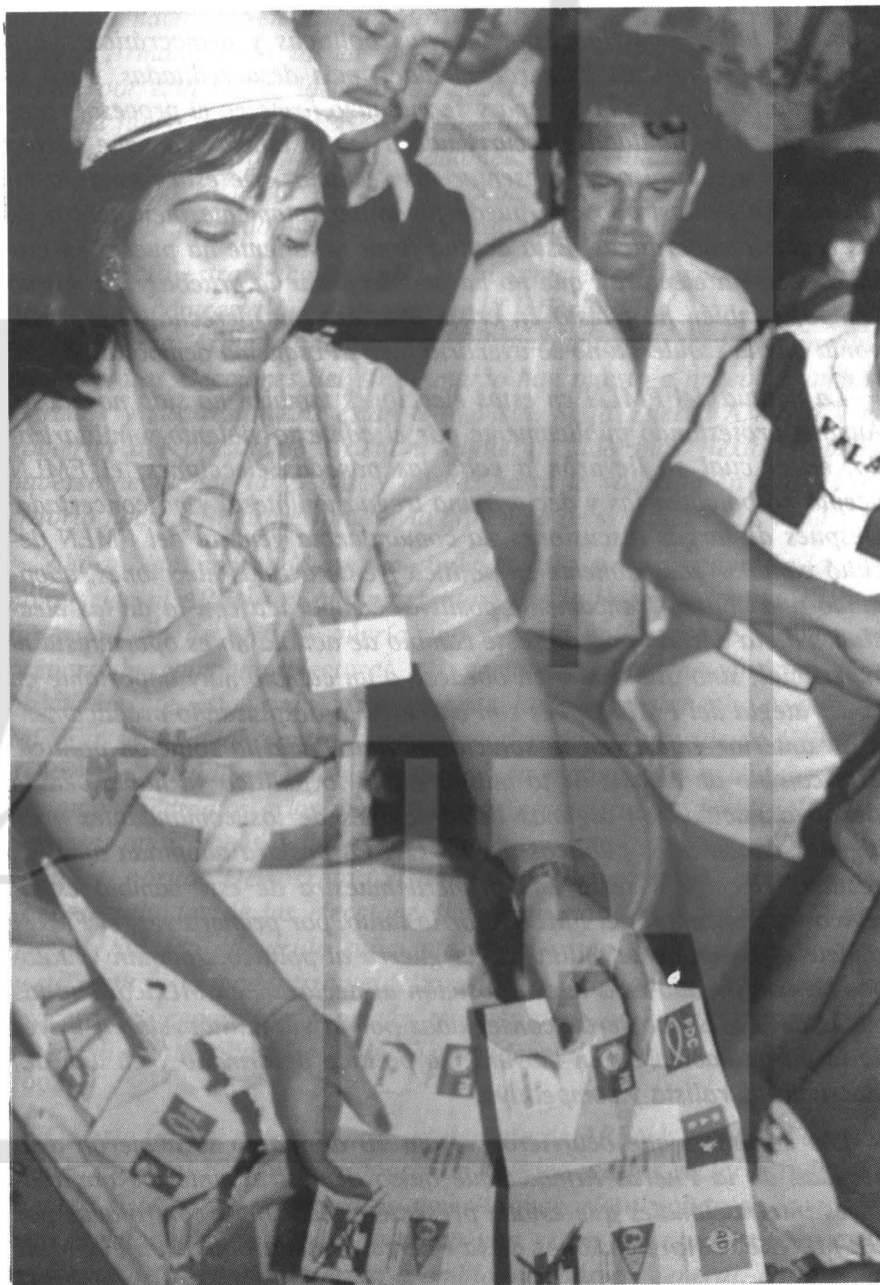
3. La participación de la izquierda pone en crisis el modelo electoral

La participación de la izquierda en las elecciones del 10 de marzo ha puesto en crisis el modelo electoral vigente, el cual no ha podido resistir la prueba de esta novedad política. La gran novedad de estas elecciones es que se llevaron a cabo en un contexto de negociación, presentándose como un posible instrumento para promoverla eficazmente. Las seis elecciones anteriores tuvieron lugar en un contexto de guerra y como parte del plan contrainsurgente, promovido por Estados Unidos. En el contexto actual de negociación, las elecciones tenían la posibilidad real para constituirse en un eficaz instrumento para la paz y, por lo tanto, para terminar con la guerra.

Esta posibilidad real radica en que, en estas elecciones, participaron fuerzas políticas —la Convergencia Democrática y la Unión Democrática Nacionalista— con capacidad para promover la negociación y para obtener un respaldo popular significativo. Esto es realmente nuevo, porque el otro partido que pudo haber hecho algo para hacer avanzar el diálogo-negociación fue el partido Demócrata Cristiano; sin embargo, cuando estuvo en el poder, éste no tuvo capacidad para ello, porque se puso al servicio del proyecto estadounidense para el país, el cual, en aquel momento, no contemplaba la negociación como una alternativa. Aparte que la derecha se opuso tenazmente a ello. Desde la oposición, los demócrata cristianos tampoco se han mostrado partidarios decididos de la negociación.

Después de catorce años de ausencia, a causa de los escandalosos fraudes electorales de 1972 y 1977, llevados a cabo por la Fuerza Armada y el partido de Conciliación Nacional, que le cerraron las puertas para participar en el juego político partidario, la izquierda ha regresado para tomar parte en el esquema electoral. Más aún, en las pasadas elecciones del 10 de marzo, la izquierda ha demostrado una férrea voluntad política y una considerable vocación democrática, al aceptar las reglas del juego democrático y al aprovechar todas las oportunidades que éste ofrecía, todo ello pese a las provocaciones de la extrema derecha y a las graves limitaciones del actual sistema electoral. Así, la

izquierda democrática invitó a la población a votar masivamente, cambiando radicalmente su postura frente a las elecciones, que hasta ahora había sido de repudio total. Para la izquierda, y para la oposición en general, cada voto no emitido era un voto favorable para ARENA. Lo importante era votar por la oposición real (el partido Demócrata Cristiano, la Convergencia Democrática y la Unión Democrática Nacionalista).



La extrema derecha de ARENA y algunos elementos de la Fuerza Armada intentaron provocar el retiro de la izquierda de las elecciones, pero sin resultado. La voluntad política de la izquierda fue puesta a prueba por la violencia verbal y física de que fue objeto durante la campaña electoral y por las anomalías manifiestas del 10 de marzo. Pareciera que ciertos poderes extremistas de ARENA quisieron forzar a la izquierda a impugnar las elecciones e incluso a retirarse del proceso electoral, con lo cual hubieran hecho retroceder el proceso de negociación. De haber ocurrido ésto, las vías políticas y democráticas para resolver los conflictos hubieran quedado más desacreditadas. Pero la izquierda no cayó en la trampa y se mantuvo firme en el proceso, reconociendo su legitimidad y recurriendo a las instancias con que cuenta el sistema electoral para presentar sus reclamos. De esta forma, la izquierda ha demostrado que puede jugar perfectamente bien dentro de las reglas democráticas. Esta actitud firme y valiente ha puesto en crisis al sistema electoral, que no ha podido pasar la prueba y, al mismo tiempo, también ha puesto en crisis a la extrema derecha, que suponía que la izquierda no se avendría bien al esquema democrático.

La actitud del FMLN en estas elecciones también ha sido novedosa. Aunque protestando públicamente por el contexto violento y militarizado, en el cual se llevaron a cabo las pasadas elecciones, el FMLN aceptó no boicotearlas y declaró una tregua unilateral y no concertada. Después de largas discusiones, la comandancia general del FMLN decidió cambiar radicalmente su política frente a estas elecciones, adoptando una actitud francamente positiva, comparada con la de las elecciones de la década pasada. Este cambio de actitud no es oportunista ni superficial, sino que más bien obedece a un cambio muy importante en la estrategia del FMLN, pues con ello estaría desplazando prácticamente su anterior énfasis en la solución militar hacia la solución política. Este cambio de énfasis de lo militar hacia lo político ya había venido siendo anunciado en algunas declaraciones de los comandantes y en algunos documentos públicos del FMLN. La postura adoptada ante las pasadas elecciones sería una primera muestra de este cambio estratégico trascendental del FMLN. Por lo tanto, por primera vez, el FMLN somete el componente militar de la guerra al político. Joaquín Villalobos ha confirmado esta nueva posición al declarar, en México, que las metas del FMLN no serán conseguidas por la vía militar, sino a través de la participación en un movimiento político desarmado y en una democracia pluralista y competitiva.

Los combates que ocurrieron el día 10 de marzo se debieron a la necesidad de la Fuerza Armada que quiso demostrar ante los observadores internacionales que estaba presente en las zonas controladas por el FMLN. Estas pretensiones de la Fuerza Armada obligaron al FMLN

a defenderse y a abrir fuego. Para ambos ejércitos es importante demostrar el control territorial, porque el acuerdo de cese del fuego, probablemente, estipulará que cada ejército se mantenga en sus zonas de control, separados por una fuerza de seguridad y vigilancia de las Naciones Unidas. La Fuerza Armada hasta ahora se ha negado a reconocer que no controla todo el territorio nacional. En estas elecciones, el FMLN ha demostrado de nuevo que controla una buena parte del territorio nacional, en la cual no permitió votar. En esta disputa, la Fuerza Armada lleva las de perder en la mesa de negociación. De hecho, por esta razón, la comisión gubernamental no quiso aceptar el cese del fuego que el FMLN ya estaba dispuesto a firmar antes de las elecciones. En esa ocasión, las Naciones Unidas incluso presentó mapas levantados a partir de un reconocimiento hecho sobre el terreno por un experimentado militar de esa institución internacional.

El cambio estratégico del FMLN, al someter el componente militar al político, contrasta fuertemente con la inflexibilidad y la agresividad de la Fuerza Armada, amparadas falsamente en preceptos constitucionales. Las elecciones del 10 de marzo han puesto a prueba a ambos ejércitos y sus resultados están a la vista. Si la Fuerza Armada y el gobierno del presidente Cristiani hubieran sido más flexibles, pudo haberse negociado la tregua, y tal vez hasta la votación en todo el territorio nacional, para estimular la afluencia de votantes a las urnas.

Ahora bien, como todo parece indicar, esto era precisamente lo que no querían ni ARENA ni algunos sectores de la Fuerza Armada. El sector más duro de ARENA quería una victoria aplastante. D'Aubuisson preparó la campaña electoral del partido con mucha anticipación; prácticamente, éstas eran sus elecciones, las cuales planeaba usar para reforzar su posición contra el grupo moderado del presidente Cristiani dentro del partido. D'Aubuisson utilizó la maquinaria partidista para designar candidatos a los miembros más recalcitrantes de ARENA. Sus primeras apariciones públicas de campaña fueron agresivas, sobre todo contra el partido Demócrata Cristiano y la Convergencia Democrática. Si los resultados de las elecciones hubieran sido los esperados, D'Aubuisson hubiera adquirido suficiente poder como para detener el proyecto capitalista modernizante del presidente Cristiani y, ciertamente, el proceso de negociación, y quizás, también pensaba en comenzar a preparar su imagen como candidato presidencial para las elecciones de 1994.

De esta forma, el sector más intolerante de ARENA planeaba dar un golpe mortal al FMLN, a la oposición política y a los sectores independientes. Este sector no tolera no tener la mayoría absoluta en la asamblea legislativa y ha percibido como una grave amenaza la presencia relevante de la izquierda en la asamblea y, más en general, en la vida

El cambio estratégico del FMLN, al someter el componente militar al político, contrasta fuertemente con la inflexibilidad y la agresividad de la Fuerza Armada.

política nacional. Recordemos que fue este sector, con estrechos vínculos orgánicos con las estructuras formales de la Fuerza Armada, el que llevó al horror de los primeros años de la década pasada y el que está estrechamente relacionado con los escuadrones de la muerte. Por otro lado, la pérdida del control de la asamblea significa un juicio negativo para la gestión gubernamental de ARENA e hipoteca su proyecto estratégico, cuya meta consiste en consolidar el modelo económico neoliberal en la década presente.

Así, pues, la cuota de poder en disputa en estas elecciones era importante para todos los partidos políticos, pero por razones distintas, según los intereses representados por cada uno de ellos. La asamblea legislativa, aunque se encuentra bastante desprestigiada, tiene importancia para aprobar o derogar leyes en una determinada dirección; podría convertirse en un foro para discutir los problemas nacionales con seriedad, concretamente, podría promover la discusión de la concertación económica y social, y podría asumir un papel más activo en la negociación del final de la guerra y en la construcción de una sociedad auténticamente democrática. Ninguna de estas cosas es importante cuando la asamblea está dominada por el partido en el poder y cuando este partido toma sus decisiones guiado sólo por sus intereses partidarios. En este caso, la asamblea es sólo una correa de transmisión de la presidencia. Las elecciones municipales dan control importante sobre amplios sectores sociales a nivel local y constituyen una buena plataforma de apoyo para fortalecer a los partidos políticos.

A pesar de la importancia de la negociación en las pasadas elecciones, durante la campaña electoral casi no se dijo nada sobre ella; a lo más, algunos candidatos se refirieron a ella en términos muy generales. Los partidos políticos han evitado claramente discutir la problemática de la negociación. Ni siquiera los partidos de la izquierda han hecho planteamientos de fondo medianamente elaborados, obligados a jugar de acuerdo con las reglas impuestas por los partidos grandes. Los partidos en general sólo se limitaron a presentar algunas líneas de fuerza que orientarían su gestión legislativa y municipal.

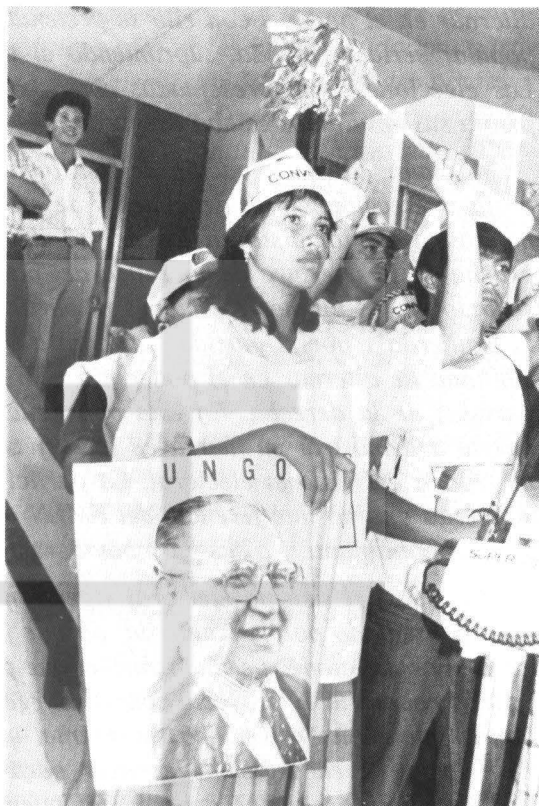
En realidad, durante la campaña electoral no se ha tratado el tema de la negociación ni ningún otro tema relevante para resolver los problemas del país. El carácter de la campaña ha sido negativo y sin contenido; al igual que las campañas electorales pasadas, se ha vuelto a desperdiciar una muy buena oportunidad para educar a la población sobre la democracia. La campaña electoral es una buena ocasión para

discutir públicamente las diferentes ofertas políticas de los partidos y de sus candidatos. Hasta ahora esto no se ha hecho en nuestro país, quizás porque aquéllos no tienen nada que ofrecer, sino seguir en lo mismo.

4. Las nuevas realidades políticas exigen un nuevo sistema electoral

Para un sector importante de la población, las elecciones son un modo de participación y de expresión. De hecho, en El Salvador hay una larga tradición electoral. Recordemos que en las elecciones presidenciales de 1972 y de 1977, la votación superó el 70 por ciento; por lo tanto, no es válido sostener que el pueblo salvadoreño siempre se ha abstenido. Al contrario, las abstenciones masivas comenzaron en la década del ochenta. Asimismo, recordemos que la cantidad de personas con carnet es significativamente más elevada en la actualidad. Si bien es cierto que se presionó inconstitucionalmente a los ciudadanos para forzarlos a la doble identificación, la cantidad de ciudadanos que ha concurrido a las urnas no es despreciable. El corrimiento de votos de un partido político a otro implica cierta seriedad de parte de los votantes al emitir su voto, pues significa que éstos no reiteran mecánicamente su voto anterior. Ninguno de estos hechos puede ser ignorado ni minusvalorado. Precisamente aquí se encuentra la legitimidad de las elecciones pasadas, no obstante sus anomalías.

Los partidos políticos de derecha y el gobierno de Washington han interpretado cada evento electoral como la consolidación del proceso democrático y el repudio al movimiento revolucionario. A los patrocinadores del proyecto dominante les interesa consolidar y legitimar el proceso actual como prueba de que en sí mismo es un proceso democrático que, supuestamente, lleva cada vez más a un mayor grado de democratización. Entre más elecciones haya, más democratización habría. En las elecciones anteriores se ha jugado con la posibilidad de



alternar en el poder y con ello se pretendía demostrar que la voluntad popular sería respetada, suprimiendo el tradicional fraude oficialista. Las elecciones eran presentadas como completamente libres y el respeto a sus resultados estaba asegurado.

Más aún, la participación de la Convergencia Democrática en las pasadas elecciones presidenciales y de este partido y de la Unión Democrática Nacionalista en las del 10 de marzo se ha ofrecido como prueba de la apertura democrática del país. De hecho, el desafío presentado en las últimas elecciones al partido oficial por los partidos de la izquierda y por el partido Demócrata Cristiano significó que la posibilidad de alternar en el poder era real y no un simple juego de los partidos de la derecha. En esta oportunidad, la oposición estaba dispuesta a demostrar su fuerza en las urnas y a probar la madurez democrática del sistema electoral. La participación de los partidos de la izquierda y la no interferencia del FMLN pusieron en serios aprietos al partido gobernante y a sus patrocinadores.

Así, pues, el sistema electoral vigente no estuvo a la altura del desafío presentado por la izquierda, porque fue establecido para llevar a cabo unas elecciones periódicamente, que prestaran la cobertura democrática necesaria al proyecto contrainsurgente. Se trata de una fachada consistente en un rito cívico recurrente, que los medios de comunicación social se encargan de explicar para que quede la sensación de haber cumplido con los deberes del buen ciudadano y con la democracia, mientras la guerra sigue con su propia dinámica. El objetivo del proyecto dominante ha sido hasta ahora derrotar militarmente al FMLN, y sólo de manera derivada y subordinada tener elecciones libres para establecer una democracia real. Una vez derrotado el FMLN, es probable que se pensara en regresar a lo mismo de siempre, con algunas reformas inevitables, es decir, a una democracia formal, pero dejando más o menos intactas las raíces estructurales del conflicto armado. En estos términos, nuestro futuro sería como el de Nicaragua, donde Estados Unidos invirtió millones de dólares para derrotar militar y electoralmente al Frente Sandinista de Liberación Nacional; pero sin estar dispuesto a invertir los millones de dólares tan necesarios para desarrollar la economía nicaragüense, que se debate desesperadamente al borde de la quiebra nacional. La crisis general en la cual se debate Panamá es otro buen ejemplo de la manera de proceder de la política estadounidense.

En el modelo electoral vigente, la cantidad de votos emitidos no era tan importante, puesto que se trataba de vender una imagen democrática y porque la cuota de poder en disputa era mínima; el poder real lo tienen quienes dirigen y financian la guerra, es decir, el alto mando de la Fuerza Armada y Estados Unidos. Los partidos políticos (el De-

mócrata Cristiano y ARENA) sólo han sido y son los gerentes del proyecto estadounidense. A los políticos sólo se les ha permitido una participación controlada; necesaria para proyectar la fachada democrática. En este sentido, Estados Unidos y la Fuerza Armada siempre han puesto el énfasis en lo militar, mientras que lo político le ha estado subordinado. Por eso, las elecciones han funcionado bien cuando en ellas sólo han tomado parte los partidos de derecha, dispuestos a gerenciar el proyecto contrainsurgente de los militares. Así lo hizo el partido Demócrata Cristiano, que sirvió de fachada democrática, y así lo está haciendo ARENA en la actualidad, aunque la gerencia de cada partido ha creado sus propias tensiones por diferencias con los patrocinadores sobre algunos aspectos de dicho proyecto.

Por todo esto, es peligroso identificar elecciones con democracia, puede haber elecciones, pero no democracia real. El carácter democrático de las elecciones depende de la cuota de poder real que se ponga en juego. Los mecanismos legales se respetan más en cuanto menos poder se pone en juego. Conocer y respetar las reglas del juego democrático no significa que se sepa jugarlo ni que se pueda triunfar en él.

En el último editorial de 1988, ECA se preguntó qué pasaría si en unas elecciones libres ganara una coalición de izquierda, que propusiera como objetivo principal la paz, alcanzada mediante la negociación con el FMLN, la recuperación de la soberanía nacional, el castigo de los responsables de los escuadrones de la muerte y de las masacres de civiles, la drástica reducción de la Fuerza Armada y su sumisión total al poder civil y un programa económico, dirigido directamente a favorecer a las mayorías populares. En esa oportunidad, ECA respondió claramente que el resultado de esas elecciones no sería respetado, ya fuera por violación de las urnas, ya fuera por presión al gobierno para que, por prudencia, no se atreviera a cumplir lo prometido en cuanto a respetar los resultados de las elecciones, ya fuera por el golpe de Estado con el pretexto consabido de estar violando la Constitución y de estar favoreciendo al comunismo (ECA, 1988, 481-482: 1004).

La pregunta sigue siendo válida en la actualidad; al hipotético programa de la coalición de izquierda podría añadirse poner fin a la impunidad de la Fuerza Armada y presentar a la justicia a los responsables de haber violado los derechos humanos. Una primera respuesta actualizada a dicha pregunta sería el proceso electoral recién pasado, en el cual han quedado claros sus graves y peligrosos límites. Si estos límites no desaparecen para permitir un juego electoral completamente libre, podríamos volver a la situación de los setenta, cuando se perdió la confianza en los procesos electorales a causa de los fraudes oficialistas. En la actualidad, todas las fuerzas sociales han reconocido la legitimidad de las elecciones del 10 de marzo, pero ya han aparecido críticas muy

graves, que si no se recogen debidamente podrían cerrar de nuevo el espacio electoral como un ámbito donde disputar el poder del Estado. El sistema electoral debe tener unas características tales que todos los partidos políticos, sin exclusión ninguna, puedan estar convencidos de que las elecciones son libres y honestas y de que todos tienen la posibilidad real de acceder al poder, si resultan elegidos

En las elecciones del 10 de marzo, los partidos de la izquierda obtuvieron unos resultados muy buenos, pero pudieron haberlos tenido mejores si hubieran tenido más claridad sobre la trascendencia política de las elecciones y si hubieran podido preparar más concienzudamente sus respectivas estructuras partidarias a nivel nacional. La falta de claridad de la izquierda a causa de liderazgos o protagonismos mal entendidos, so pretexto de salvaguardar purismos doctrinales de dudosa viabilidad o por falta de claridad sobre el alcance limitado de las elecciones, no la han favorecido frente a los otros partidos. La división de la izquierda latinoamericana es un viejo vicio que, al final, conserva intactos los liderazgos y mantiene la pureza doctrinal, pero se queda sin el poder político necesario para influir en los procesos nacionales, dejando abandonados los destinos de los pueblos latinoamericanos en manos de la derecha.

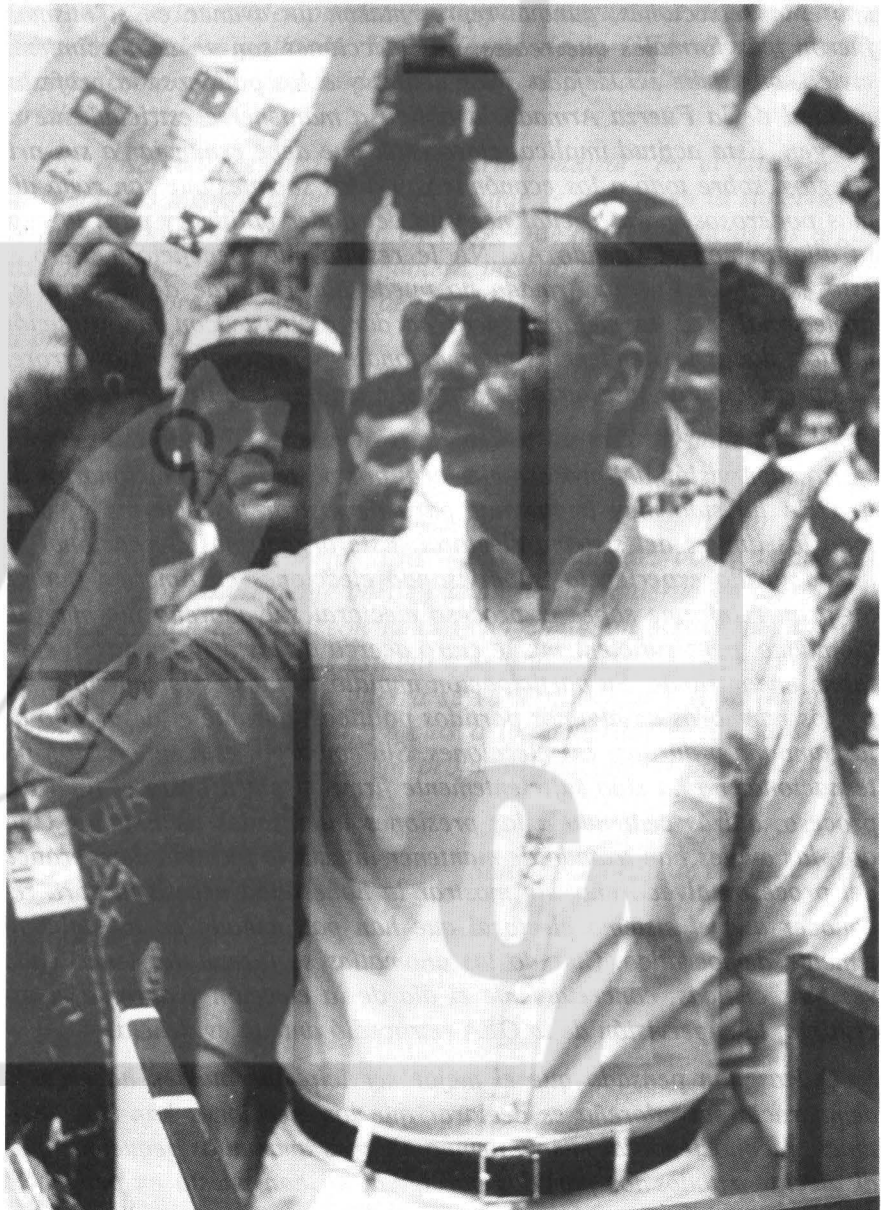
La falta de claridad de la izquierda alcanzó a las organizaciones sindicales más importantes, cuando la Unión Democrática Nacionalista incluyó las candidaturas, para diputados y concejos municipales, de los dirigentes más importantes de la Unión Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS); esta inclusión a título personal provocó confusión en las bases sindicales, a las cuales se les había dicho que no había condiciones óptimas para participar en las elecciones y que éstas sólo servían para legitimar el modelo neoliberal regentado por ARENA. Justamente antes de las elecciones, la UNTS se pronunció a favor de la Convergencia Democrática. Esta alianza entre partido político y organización sindical acarrea otro peligro que debe ser considerado cuidadosamente. En efecto, es muy peligroso vincular orgánicamente a las organizaciones sindicales con un determinado partido político, que las acabará mediatizando y desvirtuando en cuanto tales.

El no haber preparado la campaña electoral con más anticipación y la confusión ocasionada por la participación de la dirigencia sindical favorecieron a ARENA. Quizás a esto se deba, en parte, que la izquierda no haya podido capitalizar de modo relevante el descontento popular, generado por el deterioro de las condiciones de vida de las mayo-

El carácter democrático de las elecciones depende de la cuota de poder real que se ponga en juego.

rías populares a causa del programa de ajuste estructural impulsado por el gobierno de ARENA. No se preparó adecuadamente el ambiente para votar por la izquierda; ni se hizo la suficiente campaña para presentar a la izquierda como una auténtica alternativa política. Si bien estas limitaciones son producto del proyecto dominante, la izquierda también debe tener más sentido histórico, dada la altura actual del proceso salvadoreño.

La Fuerza Armada también debería reflexionar sobre el proceso



electoral recién pasado, sobre su participación en él y sobre sus resultados. En sus actuaciones, la Fuerza Armada ha aparecido muy próxima al partido ARENA, como si confiara en que este partido es su mejor garantía para preservar su institucionalidad y también su posición de privilegio económico y social. Sin embargo, si la Fuerza Armada quiere preservar su institucionalidad debiera desligarse completamente de los partidos políticos. La mejor forma para mantener su institucionalidad es siendo realmente apolítica; su apoliticidad podría dar la medida de su profesionalidad. Las normas establecidas en el instructivo sobre las elecciones, aunque representaron un avance en sí mismas, fueron más formales que reales. Las elecciones son un acontecimiento cívico, que debe ser dejado a los civiles y a los políticos; la profesionalidad de la Fuerza Armada la obliga a mantenerse estrictamente al margen. Esta actitud implica, claro está, que debe renunciar a sus privilegios, sobre todo a los económicos y a los sociales que son cada día más poderosos, para lo cual necesita del poder político y para lo cual la alianza con el partido ARENA le resulta muy beneficiosa. Pero si esto es así, la Fuerza Armada no puede hacer alarde de su carácter profesional y es la mejor manera de dar al traste con la institución militar, dadas las tendencias internacionales y regionales. Estos errores de apreciación de la Fuerza Armada son los que han llevado a pedir la disolución del ejército.

La supervisión del proceso electoral por parte de los funcionarios de la OEA ha sido muy importante para demostrar los aciertos y sobre todo los límites del sistema electoral. Este organismo internacional ya ha adquirido experiencia, supervisando elecciones en América Latina. Su primer informe sobre el proceso electoral salvadoreño fue muy diplomático, pero suficientemente claro acerca de las deficiencias que estaban encontrando. Su participación impidió incidentes lamentables entre los miembros de algunos partidos políticos, durante el desarrollo de la campaña y durante las elecciones. Sin embargo, esta supervisión internacional no ha sido suficientemente firme ni clara hasta el final del proceso, quizás cediendo a las presiones interesadas de Estados Unidos, las cuales han tratado de mantener intacta la fachada democrática del proceso salvadoreño, sin mostrar la honestidad necesaria para reconocer que el sistema electoral que han patrocinado no es suficientemente democrático. Cuando las anomalías se fueron volviendo cada vez más críticas, concretamente el día de la elección y durante el escrutinio, la supervisión de la OEA retrocedió ante la evidencia.

Quizás han pensado que el mejor servicio que pueden hacer a la democracia salvadoreña es declarar que las elecciones han sido legítimas, reconociendo al mismo tiempo algunas anomalías pequeñas, que, al afectar a todos los partidos por igual, no han puesto en peligro la

vigencia del proceso. La OEA no ha sido tan clara y firme como al comienzo del proceso, antes que diera comienzo la campaña electoral. Pero es todo lo contrario. El mejor servicio que la supervisión de la OEA puede hacer a la democracia salvadoreña es presentar un informe objetivo para ayudar a corregir el sistema electoral en todo aquello que sea corregible, o si no es reformable, para cambiarlo completamente. Lo importante no es seguir manteniendo fachadas democráticas, sino establecer un sistema electoral que garantice unas elecciones libres y honestas, entendiendo por tales unas elecciones donde se dispute el poder real y en las cuales puedan participar en igualdad de condiciones todos los partidos políticos. Este informe de la OEA debiera servir, además, como punto de partida para pedir responsabilidades políticas y jurídicas.

Los observadores de la OEA deberían utilizar, en el caso de El Salvador, los mismos criterios estrictos que se usaron en la supervisión de las elecciones de Nicaragua, en 1989. Qué hubieran dicho los organismos internacionales o qué hubiera pasado en Nicaragua si en ese proceso electoral se hubieran detectado las anomalías de que adolece el proceso electoral salvadoreño. La misma severidad con la que fueron juzgadas las autoridades nicaragüenses debe aplicarse a las salvadoreñas. Todo ello, en nombre de la democracia y de la voluntad popular, pues resulta que son las mayorías populares las más perjudicadas.

¿Qué queda ahora con el sistema electoral cuestionado gravemente, al igual que las demás instituciones del Estado? Elaborar un sistema electoral que responda mejor a las nuevas realidades políticas que están surgiendo. La creciente participación de la izquierda en la política nacional es una novedad con la cual no contaban seriamente los organismos y las instituciones estatales, pensados más desde una perspectiva contrainsurgente. Si la guerra se va terminando y si va desapareciendo la oposición armada, gracias a los acuerdos negociados entre los dos ejércitos, debe darse un profundo reacomodo político que dé cabida a estas nuevas realidades.

San Salvador, 8 de abril de 1991.